

No queremos ser los chivos expiatorios de la crisis

José Campos Trujillo
Secretario General FECCOO

EL PLAN de ajuste económico presentado por el Gobierno, aprobado con un voto de diferencia en el Parlamento y plasmado en el Real Decreto-Ley de 24 de mayo, nos parece inviable. En primer lugar, resulta antieconómico, ya que reduce drásticamente la inversión pública, lo que contribuirá a prolongar los indicadores de la recesión, desplazando la creación de empleo como objetivo central de la actividad económica. En segundo lugar, vulnera aspectos fundamentales del diálogo social y de la actividad parlamentaria, al anular acuerdos y decisiones de gran trascendencia. Por un lado, se dilapidan quince años de consenso parlamentario para garantizar el sistema público de pensiones a través del Pacto de Toledo; y por otro, se pone en cuestión la viabilidad del diálogo social cuyos acuerdos –algunos de reciente firma como el de empleados públicos– pasan a convertirse en papel mojado.

La calidad de los servicios públicos exige de la sociedad, y especialmente de sus responsables políticos, el reconocimiento y valoración que les corresponde por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia...

Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir sus salarios es el peor mensaje que se pueda enviar. Al mismo tiempo, actuar así en la función pública puede influir negativamente en la negociación colectiva privada, todavía en ciernes, cuando ésta estaba pacificada a través del reciente acuerdo suscrito para los años 2010-2012.

Hace un año CCOO propuso un Pacto de Estado por la economía y el empleo y la cohesión social que, entre otras propuestas, exigía la reforma del sistema financiero, una fiscalidad progresiva que recupere algunas figuras tributarias (patrimonio, sucesiones) y una decidida lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, al mismo tiempo que una política industrial, energética y educativa que dotase a nuestro país de posibilidades de salir de la crisis garantizando un cambio en el patrón de crecimiento sobre una amplia cohesión social. En definitiva, apostamos por un esfuerzo compartido, teniendo presente que las trabajadoras y trabajadores de este país ya lo están haciendo en forma de destrucción de empleo y de acuerdos de moderación salarial (como los que ahora se contravienen de empleados públicos o el de negociación colectiva para el período 2010-2012). Un esfuerzo compartido requiere, así, el necesario equilibrio entre las políticas de ingresos y gastos para garantizar la capacidad de intervención del Estado.

Por eso, exigimos al Gobierno que negocie y acuerde en el ámbito político y social un paquete equilibrado de medidas más acordes a las necesidades del país.

Paralelamente, en la Federación de Enseñanza hemos venido apostando por un refuerzo de la educación pública como la vía más recomendable para salir de la crisis, mejorando la calidad de la enseñanza, luchando contra el abandono y el fracaso escolar y potenciando de una vez por todas la Formación Profesional y la educación a lo largo de la vida. Todo ello requiere inversión en recursos humanos y materiales y una acción política coherente e ininterrumpida. ¡Ya está bien de considerar

la educación como un gasto y no como una inversión! Pero lo peor que podemos hacer ahora es quedarnos paralizados. Si no nos movilizamos con fuerza y contundencia nos van a pasar el rodillo de una vez y para siempre en muchos temas: Ahora son nuestros salarios, enseguida vendrá la supresión de la Jubilación LOE, la reforma laboral vía decreto... y que nadie espere el menor desarrollo de los derechos a que se habían comprometido en el borrador de Estatuto Docente.

Los funcionarios hemos sido las víctimas habituales de todas las crisis económicas, y si no que les pregunten a los empleados de la administración general del Estado

Nuestros gobernantes pretenden convertir una vez más a los empleados públicos en el chivo expiatorio de esta crisis. Por eso tenemos que desmentir con contundencia las falacias que lanzan los medios de comunicación contra el sector público. Los funcionarios hemos sido las víctimas habituales de todas las crisis económicas, y si no que les pregunten a los empleados de la administración general del Estado, que apenas acaban de comenzar a cobrar sus pagas extras completas. Nuestros salarios no han crecido durante los años de bonanza económica en la misma medida que en el sector privado y nuestras pensiones serán en el futuro también menores.

Los empleados públicos somos la primera línea de la atención directa a la ciudadanía y la garantía de prestación de unos servicios de calidad en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales y también en el conjunto de los servicios administrativos abiertos a los ciudadanos. Estamos dispuestos a asumir el sacrificio necesario para salir de una crisis que no hemos provocado, pero tenemos que exigir que este esfuerzo se reparta de manera proporcional entre todos, y que se den garantías de que el esfuerzo sea temporal, y de que los empleados públicos podremos recuperar a futuro nuestro poder adquisitivo. Por eso es tan importante en estos momentos nuestra movilización. El final de este curso escolar y el inicio del próximo serán cruciales para el futuro de la enseñanza pública.